

Capítulo 2

Susan J. Spronk

COVID-19 Y DESIGUALDADES ESTRUCTURALES: CLASE, GÉNERO, RAZA Y JUSTICIA DEL AGUA

Este capítulo sostiene que la pandemia de covid-19 ha expuesto profundas desigualdades estructurales en el mundo actual, basadas en divisiones de clase, género y raza: entre trabajadores con buenos empleos y trabajadores precarios, entre mujeres y hombres, entre personas racializadas y no racializadas. Desde las perspectivas de la justicia de género y el racismo ambiental, este capítulo documenta cómo las narrativas interrelacionadas del colonialismo y el capitalismo han creado el mundo desigual en el que vivimos, afianzando las desigualdades en el entorno construido, como se evidencia claramente en el acceso al agua y al saneamiento. El capítulo también analiza a la pandemia como oportunidad para reorientar los esfuerzos hacia servicios básicos universales como una forma de salir de esta crisis.

INTRODUCCIÓN

La pandemia de covid-19 debe entenderse desde el punto de vista de las desigualdades estructurales. Para contener la propagación del virus, los ministerios de salud y la Organización Mundial de la

Salud (OMS) han aconsejado a todo el mundo que se lave las manos con frecuencia, use mascarillas, permanezca en casa y practique el distanciamiento físico en los espacios públicos. Estas recomendaciones son meros inconvenientes para la mayoría de los trabajadores y las élites del que pueden refugiarse en sus domicilios gracias a los llamados “trabajadores esenciales”, quienes han seguido arriesgando su propia salud para satisfacer nuestras necesidades, entregar nuestros paquetes, desinfectar nuestros espacios públicos, poner comida en los estantes, cultivar nuestros alimentos y cuidar de los enfermos y los ancianos. Además, estas recomendaciones son casi imposibles de seguir para las personas que tienen poco o ningún acceso a agua potable o instalaciones sanitarias, que dependen del jornal de cada día para sobrevivir o que viven en asentamientos informales densamente poblados, en campos de refugiados, o en la calle.

La pandemia y sus consecuencias económicas han puesto de manifiesto las líneas divisorias de los privilegios y las desventajas: mientras que algunos estamos en una posición social que nos permite seguir siendo económicamente estables y mantenernos sanos, la mayoría de la población se enfrenta a un futuro con más riesgos y más vulnerabilidad, y ya ha sufrido impactos devastadores. El virus ha puesto de manifiesto las grietas de nuestras sociedades desiguales, dejando al descubierto profundas contradicciones de clase, género y raza, tanto dentro de los países como entre ellos.

La falta de acceso a agua y saneamiento básicos es una de esas formas de desigualdad. En el año 2017, 3.000 millones de personas seguían careciendo de instalaciones básicas para lavarse las manos en casa: 1.600 millones carecían de agua o jabón, y 1.400 millones no tenían ningún lugar de aseo (UNICEF y WHO 2019). No es de extrañar que este déficit afecte sobre todo a los pobres de las zonas más vulnerables de la economía mundial, en particular a las mujeres y niñas pobres que se encargan de conseguir agua en comunidades que no tienen acceso a una fuente de agua mejorada y/o a la red de saneamiento.

Este capítulo argumenta que, para entender y abordar estas desigualdades, debemos entender cómo el poder y la desigualdad se estructuran de forma diferente para los grupos históricamente oprimidos en el marco del capitalismo y el colonialismo. Lograr una justicia del agua que contribuya a la justicia de género y de raza requiere algo más que una simple reforma de las instituciones para ampliar la representación de las mujeres y otras minorías políticas. Requiere un replanteamiento del sistema lucrativo que amenaza la ecología, una redistribución de la riqueza y el poder, y una inversión pública masiva en servicios básicos universales.

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LAS PANDEMIAS

Las pandemias afectan de forma diferente a hombres y mujeres, y la covid-19 no es una excepción. Los primeros datos indican que en todo el mundo hay más mujeres que hombres infectados por el virus, pero los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de enfermar gravemente y morir a causa de la covid-19. Es probable que esta mayor tasa de morbilidad masculina se deba en parte a las normas de género que afectan al comportamiento, como las mayores tasas de tabaquismo entre los hombres (Wenham et al. 2020). Sin embargo, dado que hay más mujeres que hombres empleadas como trabajadoras de primera línea en servicios esenciales (Boniol et al. 2019) y que es más probable que ellas trabajen en actividades de alto contacto, económicamente inseguras y sin protección (ILO 2020), las mujeres son más propensas a contraer la enfermedad. Las mujeres, especialmente las racializadas, las discapacitadas y las *queer*, también son más susceptibles a la inestabilidad económica y a la interrupción de servicios y recursos necesarios para el bienestar y la supervivencia (UNPFA 2020).

Durante la pandemia, el trabajo no remunerado en el sector de cuidados ha aumentado drásticamente. La UNESCO informó del cierre de escuelas en 180 países, afectando al 60% de la población estudiantil mundial. Las necesidades de cuidado de las personas

mayores también han aumentado debido a la saturación de los servicios sanitarios. La carga doméstica y social de las mujeres ha aumentado exponencialmente. Como ya lo ha advertido Helen Lewis (2020), en los primeros días de la crisis:

A nivel individual, las decisiones de muchas parejas en los próximos meses tendrán mucho sentido económico. ¿Qué necesitan los enfermos durante una pandemia? Cuidado. ¿Qué necesitan las personas mayores que se autoaislan? Cuidado. ¿Qué necesitan los niños que no van a la escuela? Cuidado. Todo ese cuidado, todo ese trabajo no remunerado, recaerá en mayor medida en las mujeres, debido a la estructura actual de la fuerza laboral.

Las recomendaciones de quedarse en casa y los estrictos confinamientos decretados en muchos países han dejado sin trabajo tanto a hombres como a mujeres, pero las trabajadoras, sobre todo las racializadas (especialmente en los países del Norte), tienen muchas más probabilidades de perder su empleo (PSAC 2020). Para muchas parejas de sexos opuestos que cuidan de menores, enfermos o ancianos, también podría tener sentido que la mujer dejara su trabajo y se quedara en casa, ya que las mujeres suelen ganar menos que sus homólogos masculinos. La Organización Internacional del Trabajo (ILO 2020) estima que en Canadá, entre abril de 2019 y abril de 2020, el 16% de las mujeres sufrieron un aumento de las tasas de desempleo, en comparación con el 13% de los hombres. Estas diferencias son más dramáticas en lugares con peores niveles de desigualdad de género, como en Colombia, donde el desempleo femenino aumentó un 29%, mientras que el de los hombres tuvo una baja de 21% durante el mismo período.

La violencia de género también ha aumentado exponencialmente. Muchas mujeres se ven obligadas a encerrarse en casa con los miembros del hogar que las maltratan y, al mismo tiempo, los servicios de apoyo a las supervivientes se han visto interrumpidos y son

de más difícil acceso. Además de la presión económica que supone para las personas y las familias, el confinamiento también puede provocar estrés. En el caso de los hombres, que suelen considerarse el sostén de la familia, la pérdida de empleo y de ingresos puede dar lugar a mayores índices de ira y de enfermedades mentales (incluyendo pensamientos suicidas) y, para algunos, la violencia doméstica pasa a ser una vía de escape. Muchos trabajadores inmigrantes han perdido su empleo y han tenido que volver a sus hogares en el campo, lo que ha alterado la dinámica de género en esas familias. Diversas investigaciones han documentado cómo en países tan distintos como Egipto, Jordania, India, Indonesia, Marruecos, Nepal y Tanzania, las mujeres cuyos maridos emigran adquieren autonomía en la toma de decisiones, lo que a menudo es apreciado a pesar del aumento de las responsabilidades (Ullah 2020; Desai y Banerji 2008; Archambault 2010; Marjahan et al. 2012). Una revisión exhaustiva realizada por Peterman et al. (2020) ha identificado varios factores como posibles correlaciones directas o indirectas entre las pandemias y la violencia contra las mujeres y las niñas: la inseguridad económica y el estrés relacionado con la pobreza, la mayor exposición a relaciones de explotación a medida que cambia la estructura y la composición del hogar, y la incapacidad de las mujeres para escapar temporalmente de parejas abusivas.

Las pandemias también reducen el acceso a la salud sexual y reproductiva. Las emergencias sanitarias del pasado han demostrado la importancia de mantener abierto el acceso a clínicas y hospitales durante las crisis, incluida la atención prenatal y neonatal. Por ejemplo, el cierre de las clínicas de salud materna en África Occidental durante la crisis del ébola de 2012-14 dio lugar a un aumento del 70% en la ya elevada tasa de mortalidad materna de la región (Care e IRC 2020). En Sierra Leona, la interrupción de los servicios de salud materna y el miedo a buscar tratamiento debido al brote contribuyeron a alrededor de 3.600 muertes maternas, neonatales y mortinatos. En los países afectados, el número de muertes de mujeres causadas por problemas relacionados con la falta de atención

sanitaria fue mayor que el número de muertes causadas por el virus del ébola (Sochas et al. 2017, Jones et al. 2016).

GÉNERO Y CLASE EN EL ACCESO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

El agua es fundamental para la vida. En todo el mundo, las mujeres son las principales proveedoras de cuidados en los hogares. Las mujeres dependen del agua para la mayoría de las tareas cotidianas de cuidado, como la preparación de alimentos, la limpieza, la higiene personal y el cuidado de niños, enfermos y ancianos, así como para cultivar y mantener el ganado. En las zonas marginalizadas de la economía mundial, donde los hogares carecen de acceso a las infraestructuras de red, la tarea de conseguir agua recae de forma desproporcionada en las mujeres y las niñas (UN Water 2006).

Los *lockdowns* y otras medidas de confinamiento han dificultado a muchas mujeres la obtención de agua potable y alimentos para sus hogares. Algunas mujeres tendrán que decidir si pasan el tiempo permitido fuera del hogar para conseguir agua potable o alimentos para sus hijos y familias. Las estrictas medidas vigentes en muchos países, como los toques de queda y los límites para congregarse en puntos comunitarios de distribución de agua, agravan aún más estas dificultades. En todo el mundo, el 29% de las personas no tiene acceso al servicio de agua en sus viviendas (hasta el 73% en el África subsahariana). Los largos recorridos adicionales a las fuentes de agua causados por el aumento de la demanda significarán más posibilidades de contacto con otras personas, con riesgos agregados (UNICEF/WHO JMP 2020). Las mujeres suelen recorrer largas distancias y/o deben esperar en largas colas para recoger agua. UNICEF ha calculado que antes de la pandemia el tiempo que las mujeres dedicaban a recoger agua a diario ascendía a 200 millones de horas (equivalentes a más de 22.800 años). Es probable que la covid-19 haya empeorado esta situación. A muchas personas, la pandemia les obligará a dedicar aun más de sus ya escasos recursos a comprar agua a un precio inasequible a vendedores privados que

ven la crisis como una oportunidad para obtener ganancias adicionales (Nath y Gosling 2020).

Las mujeres y las niñas también se enfrentan a problemas particulares debido a la falta de acceso a saneamiento adecuado. Las mujeres y las niñas que defecan al aire libre o en letrinas remotas o situadas en espacios inseguros se enfrentan a un mayor riesgo de violencia sexual. La menstruación también presenta otros desafíos. Incluso en épocas no pandémicas, una gestión inadecuada de la higiene menstrual impide a muchas niñas asistir a la escuela. UNICEF ha estimado que 1 de cada 10 niñas en África deja de ir a la escuela durante sus periodos (citado en Noriega 2015). En épocas de aislamiento forzoso y cierre de muchas instalaciones públicas, la capacidad de las mujeres y las niñas para gestionar la menstruación puede verse aún más comprometida en las comunidades y en los hogares. Encontrar un sitio limpio y privado para cambiarse y lavarse mientras permanecen en casa durante la mayor parte del día con su familia, y acceder a materiales menstruales y agua, se torna más difícil. Como ya lo dijo Jennifer Weiss-Wolf (2020), “la menstruación no se detiene durante las pandemias”. Para atender sus necesidades, las niñas y las mujeres necesitan acceso a productos de higiene menstrual, así como a letrinas e instalaciones para lavarse las manos en lugares separados por sexo y equipados con cerraduras e iluminación, así como a instalaciones de eliminación de residuos seguras y discretas (Cone 2020). Estos requerimientos deben regir por igual tanto para los espacios públicos, como para las escuelas, los asentamientos informales o los campos de refugiados.

Las directrices para enfrentar la covid-19 distribuidas por la OMS son esenciales para preservar la salud de todos, pero está claro que las mujeres, especialmente las pobres, se enfrentan a retos para su aplicación que son muy diferentes a los de los hombres. Las mujeres necesitan el apoyo de los gobiernos y de las organizaciones internacionales para garantizar que la pandemia no acabe con décadas de avances en materia de igualdad de género (UN 2020). El acceso al agua potable y al saneamiento debe formar parte del

programa de igualdad de género. La justicia del agua y la justicia de género no pueden ser tratadas como dos cuestiones separadas.

AGUA Y SANEAMIENTO Y RACISMO AMBIENTAL

Debido a las relaciones sociales históricas y actuales que derivan del colonialismo, el acceso a las infraestructuras de red que proporcionan un suministro continuo de agua potable y saneamiento adecuado es también muy desigual. Aunque factores ambientales como la sequía y el suministro limitado afectan a la prestación de estos servicios, debemos ir más allá de la idea de que la escasez viene determinada por la naturaleza. El informe del PNUD del año 2006 *Más allá de la escasez. El poder, la pobreza y la crisis mundial del agua* ya había alertado sobre el modo en que la crisis se construye socialmente. Según el informe:

Hay agua más que suficiente en el mundo para fines domésticos, para la agricultura y para la industria. El problema es que algunas personas -sobre todo las pobres- se ven sistemáticamente excluidas del acceso por su pobreza, por sus limitados derechos legales o por políticas públicas que limitan el acceso a las infraestructuras que suministran agua para la vida y los medios de subsistencia (2006, 3).

Entre las exclusiones sistémicas que generan pobreza se encuentra el racismo ambiental, evidente en la discriminación de las comunidades racializadas que residen en zonas marginalizadas, al estar forzadas a vivir cerca de minas, vertederos tóxicos y otros espacios con mayores niveles de contaminación del aire, el agua y el suelo (Bullard 1993).

Los impactos territoriales y sociales de la crisis de la covid-19 serán muy desiguales, pero uno de los efectos positivos duraderos ha sido la aparición de un movimiento social global contra el racismo con epicentro en Estados Unidos. El resurgimiento del *Black Lives*

Matter (Las Vidas Negras IMportan) que ha estallado en el contexto de la pandemia tras el asesinato de George Floyd y Breonna Taylor (y de muchos otros hombres y mujeres asesinados por las fuerzas del orden) ha dejado al descubierto las formas a través de las cuales el colonialismo y el racismo han configurado el acceso al Estado y sus servicios, en particular la policía y el sistema penal. Pero también se están revelando importantes conexiones entre el racismo y otras cuestiones urgentes, como el impacto diferencial del cambio climático y las desigualdades en nuestros entornos construidos con impactos negativos en los indicadores sanitarios. En palabras de Patrisse Cullors y Nyeusi Nguvu (2017), miembros del movimiento *Black Lives Matter*, “el racismo es endémico a la desigualdad global. Esto significa que los más afectados -y asesinados- por el cambio climático son los negros y los pobres”. La pandemia ha puesto de manifiesto la forma en que el racismo ha estructurado nuestras sociedades altamente desiguales, que privan a las comunidades racializadas de la infraestructura para mantenerse sanas y seguras.

En los países del Norte, los legados del racismo ambiental en los estados creados por colonos blancos, como Estados Unidos y Canadá, han dejado a las comunidades históricamente marginalizadas en más alto riesgo de sufrir los efectos de la covid-19 y de carecer de acceso a agua limpia y segura y al saneamiento. La literatura crítica sobre los determinantes sociales de la salud reconoce que el racismo es uno de los principales factores responsables de los peores resultados de la salud pública entre las comunidades racializadas e indígenas en Estados Unidos y Canadá (Paradies et al. 2015; Greenwood y Leeuw 2012). Una enfermedad como la covid-19, que puede explotar problemas de salud y deficiencias infraestructurales preexistentes, constituye un grave riesgo para estas comunidades.

El racismo estructural existe porque las prácticas discriminatorias en un sector particular -educación, empleo, vivienda, mercados crediticios, atención sanitaria o sistema judicial- refuerzan prácticas paralelas en otros sectores. El racismo estructural crea sistemas interconectados de desigualdades arraigadas en las leyes y

políticas que conforman la economía. En consecuencia, casi todos los aspectos de nuestra economía política refuerzan mutuamente prácticas que permiten o fomentan creencias discriminatorias, estereotipos y la distribución desigual de los recursos. Como afirman los investigadores de la salud Egede y Walker (2020, 1-2):

Aunque el racismo estructural determina la distribución de los determinantes sociales de la salud y los factores sociales de riesgo, la actuación del sistema sanitario se ha visto obstaculizada por la falta de comprensión de cómo evitar que esas variables influyan en la salud. Además, el discurso sobre los determinantes sociales suele enmarcarlos como factores negativos que sólo afectan a algunos grupos, cuando en realidad los factores no médicos pueden conferir beneficios y riesgos para la salud de toda la población. Debemos centrarnos en abordar tanto los factores sociales de riesgo (condiciones sociales adversas asociadas a la mala salud) como las necesidades sociales insatisfechas (condiciones sociales inmediatas que los individuos identifican como más apremiantes para ellos).

La necesidad insatisfecha más evidente para muchos estadounidenses es la falta de seguro médico. Estados Unidos es uno de los únicos países industrializados avanzados que no tiene acceso universal a la atención sanitaria, cuyas nefastas consecuencias se revelan dolorosamente con la pandemia. Pero el acceso a la salud va más allá de la cuestión del seguro. Como lo dijo recientemente la diputada Alexandra Ocasio-Cortez (2020) en la Cámara de Representantes de ese país, “las muertes por covid-19 están aumentando desproporcionadamente en las comunidades negras y marrones. ¿Por qué? Porque el peaje crónico del racismo ambiental y la brecha de ingresos son condiciones de salud subyacentes. La desigualdad es una comorbilidad”.

Los datos que rodean las disparidades raciales en los casos y

muertes en Estados Unidos han revelado que la afirmación de Ocasio-Cortez es un hecho irrefutable. En ese país, la tasa de infección por la covid-19 es tres veces mayor en los condados predominantemente negros que en los predominantemente blancos, y la tasa de mortalidad es seis veces mayor. Sólo en Chicago, más del 50% de los casos de covid-19 y casi el 70% de las muertes por se han registrado entre la población negra, que sólo representa el 30% de la población total de Chicago (Egede y Walker 2020). Esta nueva y terrible demostración de la arraigada desigualdad constata la continuidad de una historia que tiene siglos de antigüedad: un legado de la esclavitud, pero también un componente integral de la globalización neoliberal.

La ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, es una urbe ciudad desindustrializada del llamado “cinturón del óxido”, cuyo declive está relacionado con la globalización neoliberal, demostrativo de una historia particularmente nefasta en lo que respecta al racismo y a la prestación de servicios básicos esenciales para la salud pública. Desde el año 2014, a más de 140.000 hogares de Detroit se les ha desconectado el servicio de agua como parte de un programa de cancelación de deudas. Solo en el año 2019, el proveedor de agua cortó más de 23.000 cuentas. Después de que la OMS declarara la covid-19 como pandemia, en la segunda semana de marzo, la municipalidad prometió restablecer el agua a los residentes, pero a finales de mes apenas 1.050 de las 10.000 personas que habían solicitado la reconexión habían recuperado el agua sin penalización. Según un informe municipal, a 8.000 residentes se les dijo que no podían acogerse al Plan de Restablecimiento del Agua. Como lo afirmara la reverenda Roslyn Bouier, directora ejecutiva de una ONG local que lucha contra las desconexiones de agua, en una entrevista con el diario *The Guardian*, “el sentido común me dice que esto es racismo”, destacando que la mayoría de las personas a las que se les ha cortado el agua son negras y pobres (citado en Noor 2020). La falta de acceso al agua es un factor que ayuda a explicar la mayor tasa de mortalidad de la covid-19 entre los afroestadounidenses.

La tasa de mortalidad por covid-19 en Michigan es del 7% de los casos confirmados; los afroestadounidenses representan el 40% de las muertes del estado, pero sólo el 14% de la población. (Para más detalles sobre los cortes de agua en Estados Unidos, véase el capítulo de Warner et al., en este libro.)

A menudo se considera que Canadá es el vecino norteño de Estados Unidos más amistoso, más igualitario y menos racista, pero allí la pandemia también ha golpeado con más fuerza a las comunidades racializadas. En Toronto, la mayor ciudad de Canadá, los negros y otras personas de color representan el 83% de los casos de covid-19, pese a que que constituyen solo la mitad de la población (Cheung 2020).¹ Como sostiene Kwame McKenzie, director general del Instituto Wellesley y profesor de psiquiatría de la Universidad de Toronto, “algunas personas pensaron que la pandemia sería el gran igualador. Pero la covid-19 no es un igualador: discrimina”. Según explica, las personas racializadas tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y en viviendas precarias, de ser víctimas de la delincuencia y la discriminación, de tener un trabajo precario y problemas para conseguir alimentos nutritivos en cantidad y calidad suficientes. Todos estos factores, determinantes sociales de la salud, conducen a peores resultados sanitarios (citado en Cheung 2020).

Las comunidades indígenas de Canadá también son más vulnerables a las infecciones debido a la falta de agua potable y a las condiciones insalubres, especialmente en las reservas. Durante la pandemia de H1N1 en 2009, los pueblos indígenas constituían solo el 4% de la población, pero representaron el 28% de los ingresos hospitalarios y el 18% de las muertes (National Collaborating Centre for Aboriginal Health 2016). La respuesta del gobierno, ampliamente considerada como inadecuada, fue recibida con intensas críticas.

¹ Los datos se recogieron de forma voluntaria entre pacientes que acudieron a centros médicos entre el 20 de mayo y el 16 de julio de 2020. No incluye a personas de comunidades indígenas ni a moradores en centros de cuidado de larga duración.

El Ministerio de Salud de Canadá se vio obligado a pedir disculpas cuando, además de mascarillas y desinfectantes, envió 200 bolsas para cadáveres a las reservas del norte de Manitoba, ante la conmoción y la consternación de los líderes locales (CBC News 2009).

En la actualidad, más de 100 comunidades de las Primeras Naciones y de los Inuit de Canadá no tienen acceso a agua potable. El 15 de febrero de 2020, la agencia de Servicios Indígenas de Canadá informó que 61 comunidades tenían problemas para la provisión de agua potable a largo plazo. Esta cifra, sin embargo, no incluye las decenas de comunidades de las Primeras Naciones que han recibido avisos en los que se les indica la necesidad de hervir el agua o de no consumirla. Además de la falta de agua potable, las comunidades indígenas también carecen de instalaciones sanitarias adecuadas, viviendas y reservas de alimentos, así como del personal necesario para enfrentar emergencias (Barrera 2020). Las comunidades Inuit también corren un mayor riesgo debido a las mayores tasas de tuberculosis, el hacinamiento, la insalubridad de las viviendas y las instalaciones sanitarias inadecuadas (Kiddell-Monroe et al. 2020).

El gobierno federal ha destinado apenas 300 millones de dólares canadienses para apoyar a las comunidades indígenas, de un paquete total de egresos de 81.000 millones (Barrera 2020). Antes de la pandemia, también se comprometió a realizar inversiones para extender el agua potable a todas esas comunidades para 2021. Han habido observado progresos, pero parece poco probable que se alcance el objetivo planificado a pesar de su urgencia en el contexto de la pandemia. A medida que la covid-19 sigue sacando a la luz los puntos débiles de nuestros sistemas institucionales y la historia de colonización de Canadá, el gobierno debe proporcionar un apoyo de emergencia suficiente y oportuno a las comunidades indígenas.

Para entender el racismo a través de una lente ambiental, debemos abordar el papel desempeñado por el Norte en la subyugación de las naciones del Sur. Históricamente, esto ha ocurrido a través de la explotación de los recursos naturales, los impactos del cambio climático y las maniobras políticas, así como los muchos modos de

desestabilización resultantes de la colonización y las nuevas modalidades de imperialismo.

La historia reciente de la privatización del agua a fines del siglo pasado y en la primera década de este siglo es un ejemplo de ello. Alentadas por el “éxito” de la primera privatización del agua a gran escala en el mundo (la venta de los servicios de agua en Inglaterra y Gales en 1989), las empresas multinacionales, con sede en su mayoría en Europa y Estados Unidos, vieron la oportunidad de beneficiarse de lo que consideraban la mercancía por excelencia: el agua. La privatización del agua en los países del Sur fue promovida por el Banco Mundial, que incluyó la privatización de los servicios de agua y saneamiento como una de las condiciones exigidas para los préstamos de ajuste estructural. Años después, tras la cancelación y renegociación de los contratos y el creciente malestar social, incluso el Banco Mundial reconoció que fue un fracaso (*Wall Street Journal* 2003). Como sugieren Hall y Lobina (2006, 52) en su revisión de las inversiones en el sector del agua entre 1990 y 2005, el programa de privatización en el momento álgido de la era neoliberal en realidad retrasó el progreso del sector. Estos investigadores sostienen que las expectativas erróneas sobre el sector privado han llevado a una reducción masiva del nivel de ayuda y financiación de los donantes internacionales al sector del agua, que ha superado con creces las inversiones reales realizadas por las empresas privadas. En resumen: “la contribución neta de 15 años de privatización ha sido, por tanto, la de reducir significativamente los fondos disponibles en los países pobres para invertir en agua” (p. 52).

Décadas de ideología neoliberal que promueven la idea de que el sector privado suministrará servicios básicos a los pobres si se consiguen los incentivos adecuados, no sólo han afectado al sector del agua, sino también al de la vivienda y a otros servicios necesarios para combatir una crisis de salud pública como la de la covid-19. Como ya lo explicó Mike Davis (2006) en su libro *Planet of Slums*, el subdesarrollo del Tercer Mundo debe entenderse en el contexto de los programas de ajuste estructural auspiciados por los gestores

del capitalismo global -el Banco Mundial y el FMI- desde la década de 1980 hasta la actualidad. La población de las ciudades del Tercer Mundo ha crecido sin crear empleo, lo que ha provocado una competencia por las migajas en el sector informal urbano. La privatización empuja a una parte de la clase media a la pobreza, convierte los servicios sociales como la sanidad y el saneamiento en mercancías, y promueve la creación de comunidades cerradas para las clases media y alta. En relación con este último punto, Davis destaca cómo estas geografías crean no sólo distancias físicas, sino también una disminución de la posibilidad de cualquier noción de reciprocidad entre los que tienen y los que no tienen: “Estamos ante una reorganización fundamental del espacio metropolitano, que implica una drástica disminución de las intersecciones entre las vidas de los ricos y las vidas de los pobres” (p. 119).

La pandemia de covid-19 ha resaltado la vulnerabilidad de las personas que viven sin vivienda y sanidad adecuadas, además de la falta de acceso al agua y al saneamiento. El Banco Mundial (World Bank 2020) calcula que más de mil millones de personas en todo el mundo se enfrentan a un mayor riesgo de contraer covid-19 debido a las condiciones de vida de hacinamiento e infravivienda en los barrios marginales y otros asentamientos informales. Se calcula, por ejemplo, que el 80% de los siete millones de residentes de Dharavi, el mayor asentamiento informal urbano de Asia (situado en Mumbai, India y famoso en el mundo por la película *Slumdog Millionaire*), no tienen agua corriente. A finales de julio de 2020, una investigación concluyó que más de la mitad de los residentes de los barrios marginales de Bombay podrían haber contraído la covid-19 (Biswas 2020).

El virus también se está extendiendo rápidamente en América del Sur. En Brasil, que a mediados de agosto de 2020 era el segundo país del mundo en número de casos (después de Estados Unidos), un cuarto de los 12 millones de habitantes de Río de Janeiro vive en *favelas* densamente pobladas, la mayoría de las cuales carecen de agua y saneamiento adecuados. Un estudio encargado en junio por

la municipalidad informó de que el 28% de los residentes de una de las mayores *favelas* de Río, Cidade de Deus (que aparece en la película homónima *Ciudad de Dios*) estaban infectados (Reeves 2020).

Los gobiernos autoritarios han sido especialmente proclives a utilizar medidas represivas para mantener a sus ciudadanos más privilegiados a salvo del virus, imponiendo físicamente la separación de ricos y pobres mediante confinamientos represivos y el desalojo de tugurios y mercados informales. Aunque los confinamientos obligatorios pueden ralentizar la propagación de la enfermedad, lo hacen a expensas de los más pobres, que no tienen capacidad para adquirir una reserva de suministros esenciales como alimentos y agua, o no tienen dónde refugiarse. En países como Ecuador, Bolivia, India y Sudáfrica, los pobres que han sido acusados de infringir las órdenes de confinamiento se han enfrentado a duros castigos por parte de las autoridades y a multas elevadas. En Bolivia, por ejemplo, la multa por desafiar la cuarentena es de 150 dólares, o aproximadamente la mitad del salario mínimo mensual (Gutiérrez 2020). Los gobiernos hacen cumplir estas leyes supuestamente en nombre de la salud pública, a pesar de que estas acciones ponen a los más vulnerables -las poblaciones desplazadas- en riesgo de inanición y ruina financiera.

En India, un *lockdown* muy duro cierre obligó a los trabajadores inmigrantes a abandonar las ciudades, agolpándose en trenes y autobuses para volver a sus pueblos y respetar la medida, lo que provocó largas colas y un caos general que hizo imposible el distanciamiento físico. Muchos se vieron obligados a volver a casa a pie (Bisht 2020). En lugar de controlar el virus, estas medidas probablemente contribuyeron a su propagación. En el estado de Uttar Pradesh, un equipo de limpieza contratado para desinfectar los autobuses urbanos dirigió sus mangueras hacia los trabajadores inmigrantes, rociándolos con desinfectante (Al Jazeera 2020). Aunque el cruel acto fue condenado por los funcionarios del gobierno local, revela la forma en que se ha deshumanizado a los trabajadores migrantes en el contexto de la pandemia.

En algunos lugares, los desalojos de barrios marginales han continuado sin cesar. A principios de mayo, la Compañía de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de Nairobi, en Kenia, desalojó a más de 7.000 hogares de las tierras que dice poseer, a pesar de que estos hogares tienen título de propiedad de sus tierras y habían obtenido una orden judicial de paralización del desalojo (Amnesty International 2020). A principios de mayo, fuerzas militares con órdenes del gobierno municipal desalojaron a unas 700 familias que ocupaban tierras en Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia, a pesar de que llevaban 20 años viviendo allí. Testigos presenciales informaron de que una casa fue arrasada con un anciano dentro, y que las fuerzas militares utilizaron gases lacrimógenos para desalojar a los residentes. Los periodistas que intentaron cubrir la noticia también fueron acosados. Las organizaciones de derechos humanos han pedido justicia, cuestionando la supuesta orientación progresista del actual alcalde de Bogotá (Habitat International 2020). El informe de Habitat International plantea una pregunta crucial: “¿cómo puede la gente respetar el confinamiento obligatorio si sus casas fueron destruidas?”

Si la actual crisis sanitaria ofrece una oportunidad para un cambio fundamental, uno de los primeros objetivos debe ser la reversión de políticas neoliberales que promueven la participación del sector privado como vía para abordar los déficits de infraestructuras. Las decisiones sobre el acceso a derechos socioeconómicos fundamentales, como la vivienda y los servicios conexos, son asumidas por personas que no deben sufrir las consecuencias. Eso también tiene que cambiar.

SERVICIOS BÁSICOS UNIVERSALES COMO OPCIÓN DE SALIDA

Hace una década años que la Organización de Naciones Unidas reconoció el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano fundamental. El virus de la covid-19 demuestra por qué el agua y el saneamiento deben estar disponibles, ser accesibles y ase-

quibles para todos para mantener nuestras comunidades seguras, sanas y prósperas. Aunque el reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la ONU no supuso un cambio inmediato en la vida cotidiana de las personas que no tienen acceso al agua y al saneamiento, gracias a los esfuerzos de los movimientos sociales y sus organizaciones, los gobiernos y los organismos de ayuda empezaron a dar pasos importantes. Aproximadamente dos tercios de los países ya incluyen el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano en sus constituciones, aunque lo que significa ese derecho en términos reales está sujeto a una amplia gama de interpretaciones (Root 2020). La pandemia de covid-19 también ha puesto de manifiesto lo absurdo de la negativa de Estados Unidos a asumir sus obligaciones en materia del derecho humano al agua, contra la que ha argumentado en repetidas ocasiones, incluso en las Naciones Unidas.

El lenguaje de los derechos no siempre logra desafiar los impulsos divisivos del capitalismo. En este momento hay una apertura política para luchar por una visión que no apunte el destructivo sistema lucrativo bajo el lenguaje de los derechos, que puede ser cooptado por agendas individualistas y pro-privatización y por campañas corporativas de *greenwashing* (Fantini 2019; Karunanathan 2019). Como señala la activista por la justicia del agua Maude Barlow (2020), “el compromiso de honrar el derecho humano al agua se ve fuertemente socavado tanto por la falta de fondos invertidos por los gobiernos como por la contaminación, la extracción excesiva, el desvío y la mala gestión de las fuentes de agua del planeta. Todos los derechos humanos del mundo no proporcionarán agua limpia donde no la hay”. En resumen, la mejor manera de ver los derechos legales es como el principio y no como el final de un proceso. Como sostiene la feminista socialista Tithi Bhattacharya (2019), “un derecho legal no es un derecho en absoluto a menos que creemos las condiciones para sustanciar ese derecho”. Para sustanciar el derecho humano al agua, necesitamos urgentemente tomar medidas audaces contra el cambio climático, proteger y restaurar las cuen-

cas hidrográficas, y avanzar en una agenda pública para proporcionar acceso universal al agua potable y al saneamiento para todos. (Para más información sobre la cuestión de covid-19 y los derechos humanos al agua, véase Loftus y Sultana, en este volumen).

La crisis crea oportunidades, y la pandemia de covid-19 ha hecho que lo imposible parezca de repente posible. Por ejemplo, para evitar el colapso económico y contener la propagación del virus, los gobiernos de todo el mundo han introducido programas temporales de apoyo a los ingresos para estimular la economía. Estos programas pueden ser un pequeño paso en la dirección correcta, al demuestran que es posible que los gobiernos inviertan más. El peligro de centrarse en las ayudas a la renta en ausencia de otras medidas es que no ayuda a cambiar la naturaleza de nuestras economías neoliberales y financiarizadas, en las que los sectores suelen estar dominados por sólo un puñado de grandes empresas. Como hemos visto con las políticas de transferencia de efectivo en Sudáfrica (por ejemplo, las subvenciones sociales), los servicios básicos siguen siendo inasequibles en un contexto en el que la vivienda, la salud y la educación están siendo privatizados y tratados como mercancías (véase el capítulo de Ruitter sobre Ciudad del Cabo en este volumen). Muchos hogares simplemente se hunden más y más en la deuda, ya que las transferencias de efectivo actúan como garantía, aumentando la vulnerabilidad económica de los pobres.

Paradójicamente, los programas temporales de apoyo a los ingresos en lugares como Canadá y Estados Unidos también pueden haber ampliado la desigualdad. Un informe reciente sugiere que los cinco mayores multimillonarios del mundo han aumentado su riqueza en un 26% entre el 18 de marzo y el 17 de junio de 2020, en un contexto de desempleo generalizado (Asante-Muhammad, Collins, Ocampo 2020). Como subraya el economista progresista Gary Stevenson, el dinero puede ir a parar a los pobres, pero eso no significa que se quede con ellos. Los ciudadanos han utilizado este dinero para pagar la comida, el alquiler, las hipotecas y otros elementos esenciales. Los ricos reciben este dinero porque son los dueños de

los edificios de apartamentos, las empresas de alimentación, las empresas de comercio electrónico, los servicios públicos y los bancos. En esta época de riesgos, los ricos no están reinvertiendo este dinero creando nuevas oportunidades de empleo en la economía real, prefiriendo acumularlo en sus cuentas bancarias. Stevenson subraya que para que los gobiernos dispongan del dinero necesario para financiar los servicios básicos, construir las infraestructuras tan necesarias y redistribuir la riqueza de la economía entre los ciudadanos, tendrían que poner más impuestos a los ricos y cerrar los paraísos fiscales que los ricos explotan. “De lo contrario”, advierte, “la desigualdad seguirá empeorando, lo que significará menos posibilidades de que la economía se recupere” (citado en Livesey 2020).

Para transformar la economía también tenemos que centrarnos en medidas que distribuyan la riqueza en las áreas de la economía dedicadas a la oferta. Los planes integrales para un *Green New Deal* (Nuevo Pacto Verde) propuestos por movimientos sociales progresistas de Estados Unidos y el Reino Unido hacen precisamente eso (Aronoff et al 2019; Klein 2019). Aunque existen variantes entre los dos países -la versión del Reino Unido depende más de la cooperación internacional-, ambos reclaman una nueva y audaz reestructuración de la economía para mitigar el cambio climático, descarbonizando las actividades económicas y priorizando los cuidados mediante la expansión de la vivienda y los servicios relacionados. El manifiesto del Partido Laborista del Reino Unido, titulado “Garantizar los derechos básicos de todos mediante la prestación de servicios universales”, argumenta:

Los servicios públicos son fundamentalmente redistributivos, ya que aportan más valor relativo a las personas de menor renta que a las de mayor riqueza. Son económicamente resistentes, operando con economías de escala y proporcionando empleos gubernamentales seguros que se ve menos afectado por recesiones o crisis económicas que los empleos en servicios basados en el mercado; y pueden ser gestiona-

dos minimizando el impacto climático y ambiental con mejoras en la eficiencia de la administración pública (Labour Party UK 2019, 3)

El *Green New Deal* y su llamamiento al desarrollo de *Universal Basic Services* (servicios básicos universales) ofrecen una visión del tipo de economía que necesitamos para resolver la crisis del trabajo de cuidados no remunerado y de la crisis ecológica provocada por el cambio climático, así como para impulsar la justicia ambiental, racial y de género tras la pandemia.

CONCLUSIÓN

Las pandemias cambian la historia. Como destaca el informe del PNUD (2006) *Más allá de la escasez*, el “gran salto” en la reforma del agua y el saneamiento en la Inglaterra del siglo XIX fue el resultado de una epidemia de cólera que afectó ricos y a pobres por igual. En la década de 1920, en Lagos (Nigeria), la peste bubónica abrió el camino a la planificación urbana y a las innovaciones en materia de salud pública e higiene (Lawanson 2020).

El virus causante de la covid-19 no es en absoluto “el gran nivelador”. Los efectos generalizados y la naturaleza global de la pandemia han puesto de manifiesto las desigualdades estructurales que sustentan la economía mundial. Estas desigualdades determinan quién se ve afectado, la gravedad del impacto y las propuestas de recuperación para cuando se acabe la crisis. La pandemia de covid-19 y sus repercusiones sociales y económicas han creado una crisis mundial sin precedentes en un siglo, que requiere una respuesta holística a la altura de su enorme escala y complejidad. Pero esta respuesta, ya sea a nivel nacional o internacional, se verá muy debilitada si no tiene en cuenta que las desigualdades nos han hecho a todos más vulnerables.

Como sostiene Arundhati Roy (2020), la pandemia es también un “portal”. Cada vez más personas se preguntan por qué los pobres no

tienen comida, trabajo decente, vivienda o acceso a servicios básicos como la salud, la educación, las oportunidades de ocio, el agua y el saneamiento. Esta época de incertidumbre, protesta y revuelta ofrece la oportunidad de pensar en cómo reconstruir nuestras economías y nuestras sociedades. Las lentes de la justicia de género, ambiental y racial ofrecen algo más que herramientas para ayudar a entender el problema; también nos muestran la importancia de las luchas por la equidad para superar los legados del colonialismo y el racismo que persisten en el presente.

Tenemos la oportunidad colectiva de evitar la repetición de políticas fracasadas y de construir sociedades más igualitarias, inclusivas y resistentes. Los planes de estímulo del pasado, como el *New Deal* que siguió a la Gran Depresión, demuestran que la inversión del sector público también desempeñará un papel fundamental en esta crisis. Serán necesarias formas colectivas y públicas de gestión, planificación y financiación para crear una nueva economía. Las propuestas de un *Green New Deal* que han surgido en la última década y han cobrado fuerza en el contexto de la crisis climática, ofrecen un camino hacia una nueva economía basada en la idea de servicios básicos universales centrada en la ética del cuidado. Esto nos permitirá crear un futuro colectivo más justo, más equitativo y más sostenible.

REFERENCIAS

- Al Jazeera. 2020. Migrants in India sprayed with disinfectant to fight coronavirus. 30 de marzo. <https://bit.ly/3my63dG> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Amnesty International. 2020. Kenya: Evicted residents vulnerable to Covid-19. 7 de mayo. <https://bit.ly/3n5sDKX>. (consultado el 1 de noviembre de 2020).
- Archambault, C. 2010. Women Left Behind? Migration, Spousal Separation, and the Autonomy of Rural Women in Ugweno, Tanzania. *Signs* 35(4), 919-942. doi:10.1086/651042

- Aronoff, K., Battistoni, A., Aldana Cohen, D. y Riofrancos, T. 2019. *A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal*. Nueva York: Verso Books.
- Asante-Muhammad D, Collins C, y Ocampo O. 2020. *White Supremacy is the Preexisting Condition: Eight Solutions to Ensure Economic Recovery Reduces the Racial Wealth Divide*. Washington DC: Institute for Policy Studies (IPS).
- Barlow, M. 2020. COVID-19 puts the human right to water front and centre. *National Observer*, April 22. <https://bit.ly/35VFxoe> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Barrera, J. 2020. Ontario First Nations ‘robbing Peter to pay Paul’ as COVID-19 preparations ramp up. *CBC News*. 16 de marzo. <https://bit.ly/31XMGTv> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Bhattacharya, T. 2019. Feminism for the 99% with Tithi Bhattacharya. *The Dig*. 6 de marzo. <https://bit.ly/2JmUAj3> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Bisht, A. 2020. Chaos and hunger amid India coronavirus lockdown. *Al Jazeera*, 27 de marzo. <https://bit.ly/37RmOwy> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Biswas, S. 2020. India coronavirus: More than half of Mumbai slum-dwellers had Covid-19. *BBC News*, 29 de julio. <https://bbc.in/3e9VYAZ> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Boniol, M., McIsaac, M., Xu, L., Wuliji, T., Diallo, K. y Campbell, J. 2019. *Gender equity in the health workforce: analysis of 104 countries*. Working paper 1. Ginebra: World Health Organization (WHO).
- Bullard, R. 1993. The Threat of Environmental Racism. *Natural Resources & Environment* 7(3), 23-56.
- Care and International Rescue Committee (IRC). 2020. *Global Rapid Gender Analysis for Covid-19*. Ottawa: Care Canada e International Rescue Committee.
- CBC News. 2009. Health Canada apologizes for body bags. 17 de setiembre. <https://bit.ly/2HIN69I> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Cheung, J. 2020. Black people and other people of colour make up 83% of reported COVID-19 cases in Toronto. *CBC News*, 30 de julio. <https://bit.ly/2TFllBi> (consultado el 24 de agosto de 2020).

- bit.ly/3jGIQEj (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Hall, D. and Lobina, E. 2006. *Pipe Dreams*. Greenwich: Public Services International Research Unit, University of Greenwich.
- ILO. 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Ginebra: International Labor Organization. <https://bit.ly/3oHiplE> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Jones S.A, Gopalakrishnan S, Ameh C.A., White, S. y den Broek, N.R. 2016. Women and babies are dying but not of Ebola': the effect of the Ebola virus epidemic on the availability, uptake and outcomes of maternal and newborn health services in Sierra Leone. *BMJ Global Health* 2016; 1:e000065.
- Karunanathan, M. 2019. Can the human right to water disrupt neoliberal water policies in the era of corporate policy-making? *Geoforum* 98, 244-253.
- Kiddell-Monroe, R. Ranta, M., Enook, S. y Saranchuk, P. 2020. Inuit communities can beat COVID-19 and tuberculosis. *The Lancet* 5, e312, 1 de junio de 2020. DOI:[https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30091-8](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30091-8)
- Klein N. 2019. *On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal*. Nueva York: Simon and Schuster.
- Labour Party UK. 2019. Assuring everyone's basic rights through the provision of universal services. Issue explainer. <https://bit.ly/2TFXQYI> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Lawanson, T. 2020. Lagos' size and slums will make stopping the spread of COVID-19 a tough task. *The Conversation*, 1 de abril. <https://bit.ly/37VcdAL> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Lewis, H. 2020. The Coronavirus Is a Disaster for Feminism: Pandemics affect men and women differently. *The Atlantic*, 19 de marzo. <https://bit.ly/37Wum11> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Livesey, B. 2020. As the pandemic continues, the rich are getting richer than ever before - and economists are getting concerned. *Toronto Star*, 15 de agosto. <https://bit.ly/3kJiHq3> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Maharjan, A., Bauer, S., y Knerr, B. 2012. Do Rural Women Who Stay Behind Benefit from Male Out-migration? A Case Study in the Hills of Nepal. *Gender, Technology and Development* 16(1), 95-123. DOI: <https://>

doi.org/10.1177/097185241101600105

- Nath, P. y Gosling, L. 2020. Putting equality, inclusion and rights at the Centre of a COVID-19 water, sanitation and hygiene response. *Water Aid*. <https://bit.ly/382FCZX> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- National Collaborating Centre for Aboriginal Health (NCCAHA). 2016. *The 2009 H1N1 influenza pandemic among First Nations, Inuit and Métis peoples in Canada: Epidemiology and gaps in knowledge*. Prince George: University of Northern British Columbia.
- Noor, P. 2020. Detroit families still without clean water despite shutoffs being lifted. *The Guardian*, 20 de mayo. <https://bit.ly/34GJPQI> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Noriega, M. 2015. These girls are forced to skip class because of their periods. *Vox*, 24 de junio. <https://bit.ly/37Y64DF> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Ocasio-Cortez, A. 2020. Deaths of Inequality: AOC on Black and Latinx Communities at Epicenter of the Pandemic. *Democracy Now*, 7 de abril. <https://bit.ly/2TEsmSL> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Paradies, Y., Ben, J., Denson, N., Elias, A., Priest, N., Pieterse, A., Gupta, A., Kelaher, M., y Gee, G. 2015. Racism as a Determinant of Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PloS one* 10(9), DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138511>
- Peterman, A., Potts, A. O'Donnell, M. Thompson, K., Shah, N. Oertelt-Pri-gione, S., y van Gelder, N. 2020. Pandemics and Violence Against Women and Children. Centre for Global Development. Working Paper 528. 1 de abril. <https://bit.ly/3kKARYr> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Public Service Alliance of Canada (PSAC). 2020. Women & COVID-19: Pan-demic could set marginalized women back for decades. 20 de julio. <https://bit.ly/2HScmtv> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Reeves, P. 2020. COVID-19 Infection Rate In Rio's Favelas Far Exceeds Of-ficial Count, A New Study Says. *NPR*, 25 de junio. <https://n.pr/383XH9E> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Root, R. 2020. Has water as a human right moved from a resolution to reality? *Devex News*, July 28. <https://bit.ly/3jCPcEU> (consultado el 24 de

- Roy, A. 2020. The pandemic is a portal. *Financial Times*, 3 de abril. <https://on.ft.com/3jrNt5a> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- Ullah, A. 2017. Male Migration and 'Left-behind' Women: Bane or Boon? *Environment and Urbanization ASIA* 8(1), 59–73. <https://doi.org/10.1177/0975425316683862>
- UNICEF/WHO Joint Monitoring Program. 2020. <https://bit.ly/35TrpLW> (consultado el 24 de agosto de 2020).
- United Nations (UN). 2020. *The Impact of Covid-19 on Women. Policy Brief*. Ginebra: United Nations.
- United Nations (UN) and UN Water. 2006. *Gender, Water and Sanitation: A Policy Brief*. Ginebra: United Nations.
- United Nations Children's Fund (UNICEF) and World Health Organization (WHO). 2019. *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017. Special focus on inequalities*. Nueva York: United Nations Children's Fund y World Health Organization.
- United Nations Development Program (UNDP). 2006. *HDR 2006 - Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis*. Nueva York: United Nations.
- United Nations Population Fund (UNPFA). 2020. *COVID-19: A gender lens – Protecting sexual and reproductive health and rights and promoting gender equality*. Nueva York: United Nations.
- Wall Street Journal. 2003, 2 de julio. The World Bank as privatization agnostic.
- Weiss-Wolf, J. 2020. Periods do not stop for pandemics. *Newsweek*, 17 de marzo. <https://bit.ly/2HPIMqd> (accessed August 24, 2020).
- Wenham, C., Smith, J., y Morgan, R. 2020. Covid-19: The gendered impacts of the outbreak. *The Lancet* 395, 10227, 846-848. DOI:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30526-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2)
- World Bank. 2020. COVID-19 Turns Spotlight on Slums. 10 de junio. <https://bit.ly/3oBNDL0> (consultado el 24 de agosto de 2020).